

Revista Energética

Año 22, número 4, octubre-noviembre-diciembre 1998

Enerlac'98

- Mercados a Futuro: Manejo de Riesgos en el Sector Energético
- Energías Sostenibles para Mercados Reestructurados
- La Modernización del Subsector Eléctrico de América Latina y el Caribe
- Estadísticas Energéticas
- Calendario de Eventos

**La Reforma
Energética:
Elemento
Fundamental de las
Transformaciones
Económicas e
Institucionales de
la República
Dominicana**

Para tener una visión general del sector energético de la República Dominicana y de los importantes cambios que en el se vienen impulsando, es necesario destacar, previamente, el desempeño de la economía de este país que, en los últimos cinco años, ha pasado de una situación de escaso crecimiento económico y altos niveles de inflación a una de crecimiento sostenido, con estabilidad económica, niveles importantes de ahorro e inversión y solvencia externa.

En la década de los 80 el crecimiento de la economía dominicana promedió apenas un 3.6% anual, en tanto que entre 1993 y 1998, el crecimiento económico equivale a una tasa anual de

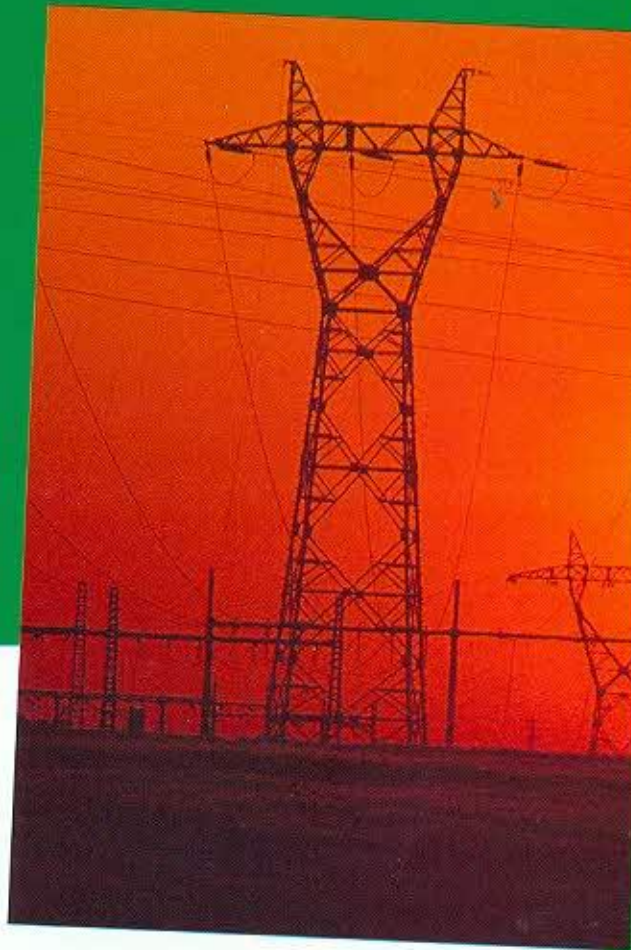
6.4%. De igual manera, mientras el nivel de inflación anual fue de 21.7% en el período 1980-1989, en los últimos cinco años el crecimiento de los precios no ha llegado a colocarse, en término promedio, por encima de dos dígitos.

El desempeño en materia de inversión también ha sido importante. A partir de 1995, la proporción del producto interno bruto destinada a la inversión se ha colocado por encima del 28%, uno de los niveles más altos de América Latina.

El dinamismo de la economía dominicana en los últimos años se ha sustentado en la estabilidad

macroeconómica obtenida gracias a un manejo cuidadoso de las finanzas públicas, en el alto nivel de ahorro e inversión y de manera muy particular en el incremento sostenido de las exportaciones de bienes y servicios, que entre 1995 y 1998, crecieron en más de un 50% valorados en dólares de 1990.

La República Dominicana, además, viene exhibiendo un comportamiento ejemplar en lo que tiene que ver con el pago de su



deuda externa. Mientras en 1990, esta deuda representaba un 83% del PIB, en 1998 ese índice se redujo a 21.6%. Entre 1993 y 1998 la deuda externa dominicana se ha reducido en mil 100 millones de dólares.

HACIA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR ENERGETICO DOMINICANO

¿Qué ha impulsado la transformación del sector en la República Dominicana?

Dos son los elementos básicos que orientan esta acción: el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la competitividad de los sectores productivos del país.

En el caso de la República Dominicana, un importador neto de energía, de bienes de capital y de tecnologías, el manejo de la crisis energética de las décadas del 70 y el 80 obligó a dedicar al sector energético recursos necesarios para otros sectores y a un endeudamiento público considerable. Todo ello para financiar subsidios e ineficiencias encubiertas que comprometían el futuro.

Ya en 1990 el subsidio a los combustibles y al sector eléctrico alcanzó una magnitud que superó las posibilidades reales del Estado y el país cayó en una crisis que generó apagones y escasez de combustible.

Felizmente, la crisis económica de 1990 impulsó decisiones dramáticas en el campo de los hidrocarburos. Aún cuando no se produjeron todas las reformas

rales, la sociedad dominicana goza de una oferta creciente y segura de combustible que se mantuvo aún en los primeros días que siguieron al paso del Huracán Georges en septiembre de 1998.

En lo que concierne al subsector de la electricidad, cabe destacar que la República Dominicana está inserta en un acelerado proceso de modernización econó-



Doctor Leonel Fernández, Presidente de la República Dominicana: "Durante la década de los 70 y el inicio de los 80, la situación energética de países como República Dominicana fue particularmente difícil por el creciente aumento de los precios del petróleo. Pero tuvimos la fortuna de poder contar con un organismo como OLADE que promovía la cooperación entre nuestras naciones para vencer la crudeza de aquellos tiempos" (discurso inaugural de la XXIX Reunión de Ministros de OLADE- Noviembre de 1998).

necesarias, se realizaron los ajustes de precios que permitieron cubrir costos y alcanzar un diferencial para invertir en acciones de desarrollo. Y aún cuando la reforma del sector quedó pendiente, desde entonces, salvo condiciones coyuntu-

mica y de urbanización que implica un consumo creciente de este energético. No se puede sustentar el desarrollo de las telecomunicaciones, del turismo, de las zonas francas y otras actividades industriales sin una oferta eléctrica adecuada y de

calidad. Pero ha venido siendo una constante que mientras más energía se coloca en el sistema interconectado para atender las necesidades del desarrollo nacional, más recursos pierde la empresa estatal. Y mientras más apoyo demanda la empresa estatal para cubrir sus déficits, más difícil le resulta al Estado apoyar el programa de inversiones que la expansión del sistema demanda.

EL IMPULSO A LAS REFORMAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

El problema antes descrito no es exclusivo del sector energético. Diversos sectores de la economía dominicana padecen los mismos conflictos, con necesidades crecientes de capital, tecnología y capacidades gerenciales que no pueden ser aportadas por el Estado. En este contexto las opciones planteadas por las autoridades gubernamentales dominicanas y, especialmente, por los responsables de modernizar el país, son simples: O se estanca el desarrollo económico y social para sustentar un monopolio que ya no tiene respuestas o se inicia el proceso de reforma para encontrar solución a una situación que no puede ser manejada por el Estado.

En una sociedad pobre que no ha podido resolver problemas básicos de salud y educación,

que tiene que mejorar el suministro de agua potable y atender con recursos muy escasos problemas fundamentales de la sociedad, un conjunto de empresas públicas que debieron generar enormes beneficios a sus propietarios se han convertido en un barril sin fondo que en 1998 absorbió el 15% del presupuesto nacional, sin ninguna perspectiva de que en manos del Estado puedan volverse rentables o resolver el conjunto de problemas cuya solución les da razón de ser.

La urgencia impostergable de solucionar este obstáculo para el desarrollo llevó a las autoridades a crear y apoyar la acción de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) de la República Dominicana.

Es en ese contexto que surge la Ley de la Reforma de la Empresa Pública, la nueva Ley de Telecomunicaciones, la Ley que crea la Dirección General de Impuestos Internos y es el mismo que sirve de escenario para que se promueva la aprobación congressional de una nueva ley arancelaria, una ley de ordenamiento de mercado, una ley de mercado de valores, una ley de reactivación de las exportaciones, una nueva ley de seguridad social, un nuevo código monetario y financiero, y con relación a lo

enfocado en este artículo, la ley general de electricidad.

LA MODERNIZACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO

Convertir al sistema eléctrico en un soporte fundamental de la nueva estrategia de desarrollo es un reto que se afronta con decisión en República Dominicana. El punto culminante de esta acción será la capitalización y reestructuración de la Corporación Dominicana de Electricidad.

El proceso se inició con el sometimiento del proyecto de Ley General de electricidad el 27 de diciembre de 1993, el cual contempla un cambio radical en las interrelaciones del sector eléctrico nacional, en el cual se incorporan experiencias exitosas de mercados eléctricos reformados a nivel internacional.

Entre sus objetivos fundamentales, este esquema prevé la creación de un mercado de generación abierto y competitivo que transfiera a los usuarios precios adecuados. La eficiencia y la productividad de la industria eléctrica deberán ser alcanzadas por el sector privado, el cual bajo las reglas de juego previamente establecidas en el marco regulatorio vigente, deberá maximizar su rentabilidad y asegure la autosostenibilidad y el creci-

miento de una industria eléctrica moderna y dinámica, capaz de satisfacer, a precios económicamente racionales, los crecientes requerimientos de energía de la sociedad.

Dentro del nuevo esquema el Estado se desliga de su función empresarial y pasa a desempeñar el rol de catalizador y fiscalizador de una actividad económica que conjuga los intereses de los inversionistas privados y de la colectividad receptora de tan importante bien.

Hasta la aprobación del proyecto de ley general de electricidad, por parte del Congreso Nacional, el gobierno dominicano utiliza la legislación vigente para establecer el marco regulatorio previsto en la misma.

¿Dentro de esta visión transformadora del sector eléctrico dominicano, qué se mantendrá en poder del Estado? La Ley de Reforma de la Empresa Pública mantiene los segmentos de generación hidráulica y de transmisión de electricidad en manos del Estado. Para ello se diseñan esquemas que permitan la adecuación de estos actores estatales al nuevo marco de operación del sector: La empresa estatal de transmisión deberá servir de catalizador de las interrelaciones comerciales de los distribuidores, generadores y grandes usua-

rios, permitiendo el libre acceso a sus líneas. La empresa hidráulica de generación administrará los contratos concertados con los productores privados independientes para evitar que los usuarios reciban la electricidad a un costo de suministro distorsionado.

Por otra parte, para consolidar una reforma coherente y estable, que permita disminuir la percepción de riesgo de los inversionistas, se ha estructurado un conjunto de contratos de cesión de derechos de explotación de obras eléctricas, que le dan profundidad al esquema regulatorio establecido a través de la legislación vigente, mediante un acuerdo suscrito entre la Corporación Dominicana de Electricidad, empresa estatal propietaria de la exclusividad de la explotación del servicio público de generación y distribución, y las nuevas empresas creadas a partir de la CDE, y a las cuales será inyectado, tanto el capital como la administración privada.

El proceso de capitalización cuyo inicio se ha previsto para febrero de 1999, ha provocado el interés de empresas internacionales de primer orden, como Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Electricidad de Caracas, Gener, Enron, AES, Coastal, EDF, etc., así la insuficiencia de oferta de electricidad que por déca-

das ha sufrido el país, llegará a su fin con la incorporación de capital privado a través de la capitalización, ya que estas empresas, tienen la obligación de agregar al sistema eléctrico nacional 100 MW anuales efectivos de capacidad.

Además, la calidad y confiabilidad del servicio no significará para el usuario un egreso adicional. La primera fijación tarifaria, que ha sido diseñada teniendo en cuenta fundamentalmente el espíritu y los procedimientos plasmados en el marco regulatorio, mantiene por los primeros cuatro años la tarifa actual e inicia la aplicación de la tarifa técnica que genera el proceso de manera gradual, disminuyendo su impacto en los sectores de más bajo consumo de electricidad mediante una atenuación de las disminuciones en los sectores de mayor consumo eléctrico.

De esta manera, el desarrollo y modernización del sector eléctrico dominicano descansa en la capacidad empresarial y gerencial del sector privado y en lo acertado que resulte la incorporación de los éxitos de las industrias reformadas a la realidad socio-económica del país, así como en la capacidad del Estado de garantizar la interrelación óptima entre el capital y el bienestar colectivo.

EL SUBSECTOR PETROLEO: UNA ANTIGUA COOPERACION ESTADO-EMPRESA PRIVADA

La República Dominicana, siendo un importador neto de petróleo, viene incrementando el consumo de este energético y sus derivados en forma sostenida durante los últimos años, en virtud del crecimiento industrial, turístico y comercial del país.


En este sub-sector se destaca el acuerdo vigente desde 1969 entre el gobierno dominicano y la empresa SHELL, por el cual cada uno detenta el 50% de las acciones de la Refinería Domina-

na de Petróleo (REFIDOMSA), cuya operación está a cargo de SHELL.

El consumo de petróleo para uso industrial aumentó en 6.1%, de 1996 a 1997. Igualmente, las ventas de los diversos tipos de gasolinas subieron en un 6.3%, en el mismo período.

Según datos publicados por REFIDOMSA, el consumo de combustibles basados en el petróleo ha mantenido un aumento constante en los últimos años, así mientras en 1995 se consumieron 16'998.300 barriles, en 1996 la cifra fue de 17'810.500 barriles.

Actualmente la refinería utiliza cerca del 90% de su capacidad de refinación, que equivale a 49.400 barriles por día, lo cual indica que de mantenerse los índices de aumento del consumo de derivados, se deberán tomar providencias para ampliar esa capacidad y atender la demanda interna.

En ello se hallan trabajando las autoridades del país, cuyo objetivo en este campo es satisfacer la demanda en términos de cantidad y calidad, como un elemento de apoyo al desarrollo socio-económico de la República Dominicana. 



El Secretario Técnico de la Presidencia de República Dominicana, Ing. Juan Temistocles Montás, viene impulsando la transformación del sector eléctrico de su país para mejorar la calidad de vida de la población y apoyar la competitividad de los sectores productivos dominicanos.

Energy. Magazine

Year 22, number 4, October-November-December 1998

Enerlac '98

- Energy Risk Management: Futures Markets
- Sustainable Energy for Restructured Markets
- Modernization of the Electric Power Subsector in Latin America and the Caribbean
- Energy Statistics
- Calendar of Events

**Energy
Reform:
Key Element
for the Economic
and Institutional
Transformation of
the Dominican
Republic**

In order to have an overview of the Dominican Republic's energy sector and the important changes that are taking place, it is necessary to emphasize previously the performance of the country's economy, which over the last five years has shifted from a situation of scarce economic growth and high levels of inflation to a situation of steady growth, economic stability, high savings and investment, and external solvency.

In the eighties, the growth of the Dominican economy, on average, amounted to 3.6% per year, whereas between 1993 and 1998, economic growth was

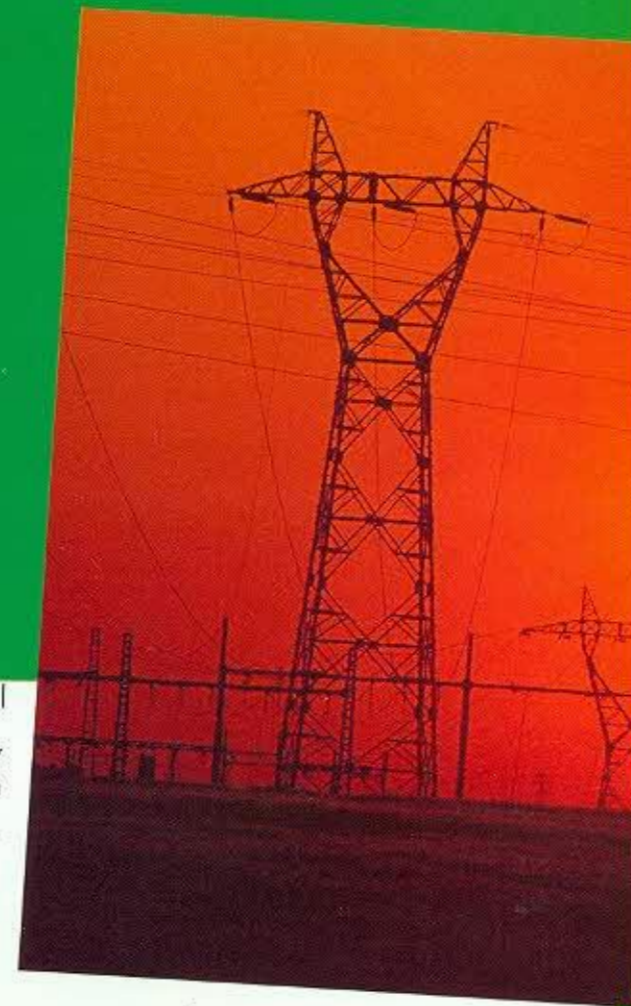
equivalent to an annual rate of 6.4%. Likewise, while annual inflation amounted to 21.7% during 1980-1989, over the last five years, growth of prices has not, on average, been over two digits.

Investment performance has also been important. As of 1995, the share of gross domestic product aimed at investment has been over 28%, one of the highest in Latin America.

The buoyancy of the Dominican economy over the last few years has been based on the macroeconomic stability achieved thanks to careful management of public finance,

the high level of savings and investment, and in particular the steady increase of exports of goods and services, which between 1995 and 1998 grew by more than 50% in terms of U.S. dollars of 1990.

Moreover, the Dominican Republic has been exemplary with respect to the payment of its foreign debt. While in 1990 this debt accounted for 83% of GDP, by 1998 this indicator had declined to 21.6%. Between



1993 and 1998, Dominican foreign debt dropped by about US\$1.1 billion.

TOWARD THE TRANSFORMATION OF THE DOMINICAN ENERGY SECTOR

What has been the driving force behind the transformation of the energy sector in the Dominican Republic?

There are basically two elements involved here: improvement of the living standards of the population and competitiveness of the country's production sectors.

In the case of the Dominican Republic, which is a net importer of energy, capital goods, and technology, to manage the energy crisis of the seventies and eighties resources needed for other sectors had to be transferred to the energy sector and a considerable public debt was incurred. All of this debt was aimed at funding subsidies and covering up inefficiencies that undermined the future.

Already in 1990 subsidies to fuels and the electric power

sector had reached such a magnitude that the State was unable to assume the burden, and this triggered a crisis that led to outages and fuel shortages.

Fortunately, the economic crisis of 1990 led to a series of dramatic decisions in the area of oil and gas. Although all the necessary reforms did not take place, prices were adjusted so that costs could be covered and a profit margin could be secured

days after Hurricane Georges hit the country in September 1998.

Regarding the electric power subsector, it should be emphasized that the Dominican Republic is involved in a rapid process of economic modernization and urbanization, which requires increasingly higher consumption of electricity. It is not possible to promote the development of telecommunications, tourism,



Doctor Leonel Fernández, President of the Dominican Republic: "During the seventies and early eighties, the energy situation of countries such as the Dominican Republic was especially difficult due to increasingly higher prices. But we were lucky to have an organization like OLADE promoting cooperation between our countries to overcome the harshness of those times" (address at the opening of the XXIX Meeting of Ministers of OLADE in November 1998).

to invest into development actions. Even when sector reform remained pending, except for specific transitory conditions, Dominican society began to enjoy growing fuel supply security, which was possible to ensure even the first

free trade zones and other industrial activities without high-quality and adequate electric power supply. But it has turned out that the more energy is placed on the interconnected system to meet national development needs, the more

resources are lost by the state power utility. Likewise, the more support is required by the state power utility to cover its deficit, the harder it is for the State to provide for the investments that are needed to expand the system to meet growing demand.

DRIVING FORCE BEHIND STATE ENTERPRISE REFORMS

The previously mentioned problem is not exclusive to the energy sector. Various sectors of the Dominican economy are experiencing the same conflicts, with growing need for capital, technology, and management skills that cannot be provided by the State. In this context, the options that have been formulated by Dominican government authorities and, especially, by those in charge of modernizing the country are quite simple: either the country's social and economic development is brought to a standstill in order to buttress a state monopoly that no longer has the right answers or a reform process is launched to find the solution to a situation that can no longer be managed by the State.

In a poor society that has been unable to resolve basic health and education problems, which must improve clean water supply, and which has very few resources available to tackle

society's most fundamental difficulties, a group of state enterprises that should have generated enormous profits for their owners have become a bottomless pit that, in 1990, absorbed 15% of the national budget. There is no prospect whatsoever that, in the hands of the State, these companies can generate profits and resolve the problems that they were supposed to address.

The urgency of overcoming this obstacle to development has led government authorities to establish a State Enterprise Reform Commission (CREP) of the Dominican Republic and to support its actions.

It was therefore in this context that the State Enterprise Reform Law, the new Telecommunications Law, and the Law establishing the Directorate General of Domestic Taxes were enacted. This was also the situation that fosters congressional ratification of a new Customs Duty Law, a Market Restructuring Law, a Stock Market Law, a Law for Reactivating Imports, a new Social Security Law, a new Monetary and Financial Code, and specifically with reference to the focus of the present article, the General Electric Power Law.

ELECTRIC POWER SUBSECTOR MODERNIZATION LAW

Converting the electric power system into a fundamental pillar of the new development strategy is a challenge that the Dominican Republic has taken up with determination. The culminating point of this effort will be the capitalization and restructuring of the Dominican Electric Power Corporation.

The process started with submittal of the bill of the General Electric Power Law on December 27, 1993, which provides for radical changes in the inter-relations of the national electric power sector, incorporating successful international experiences of electric power markets that have already been reformed.

Among its fundamental objectives, this scheme envisaged the establishment of an open and competitive power generation market that bills the users with adequate prices. The efficiency and productivity of the electric power industry should be achieved by the private sector, which on the basis of rules of the game that have been previously established by the current regulatory framework will have to maximize its profitability and ensure the self-sustainability and growth of a modern and dynamic electric power industry

that is capable of meeting society's growing energy requirements at economically rational prices.

As part of the new scheme, the State is withdrawing from its business function and is starting to play the role of catalyzer and supervisor of an economic activity that brings together both the interests of private-sector investors and those of the collective beneficiaries of this important service.

Until the bill for the General Electric Power Law has been passed by Congress, the Dominican Government is using the current legislation to establish a regulatory framework that is provided for in this legislation.

In view of this new transforming vision of the Dominican electric power sector, what will remain in the hands of the State? According to the State Enterprise Reform Law, hydropower generation and electric power transmission will remain in the hands of the State. For this purpose, schemes are being designed to permit the adjustment of these state players to the new sector operation framework. The state transmission utility will have to serve as the catalyzer for the trade relations between distributors, generators, and large users, permitting free access to its

lines. The hydropower generation utility will be administering the contracts that have been drawn up with independent power producers to prevent power from being supplied to the users at a distorted cost.

In addition, in order to consolidate a consistent and sound reform, which will help to diminish the risk perception of investors, a series of contracts for transferring the production rights of power facilities have been drawn up. These contracts support the regulatory scheme that was established by the current legislation with agreements subscribed between the Dominican Electric Power Corporation, which is the state utility that is the sole owner of public power generation and distribution service, and the new utilities stemming from the CDE that will be injected with both private-sector capital and private-sector management.

The capitalization process, which is expected to started in February 1999, has aroused the interest of first-rate international companies, such as Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Electricidad de Caracas, Gener, Enron, AES, Coastal, EdF, etc. Thus, the electric power supply shortage that the country has suffered for decades will come to an end with the incorporation

of private-sector capital by means of capitalization, since these utilities will be obliged to add 100 MW of effective capacity per year to the country's electric power grid.

In addition, the quality and reliability of the service will not mean any additional outlays for the user. The first tariff-setting exercise, which has been designed basically taking into account the spirit and procedures set forth in the regulatory framework, has determined that the current tariff will remained unchanged for the first four years and provides for the gradual application of a technical tariff, thus reducing its impact on the sectors with the lowest consumption of electricity and mitigating the reductions in the sectors with the highest electricity consumption.

Thus, the development and modernization of the Dominican electric power sector will be relying on the business and management capabilities of the private sector and to what extent the success of restructured industries can be incorporated into the country's socio-economic reality, as well as the State's capacity to guarantee an optimal inter-relation between capital assets and the common good.

OIL SUBSECTOR: A LONG-STANDING COOPERATION BETWEEN STATE AND THE PRIVATE SECTOR

The Dominican Republic, as a net oil importer, has witnessed the steady increase in consumption of this energy product over the last few years, as a result of the country's growth in industry, tourism, and trade.

Noteworthy in this subsector is the agreement in force since 1969 between the Dominican Government and Shell oil company, whereby each one is

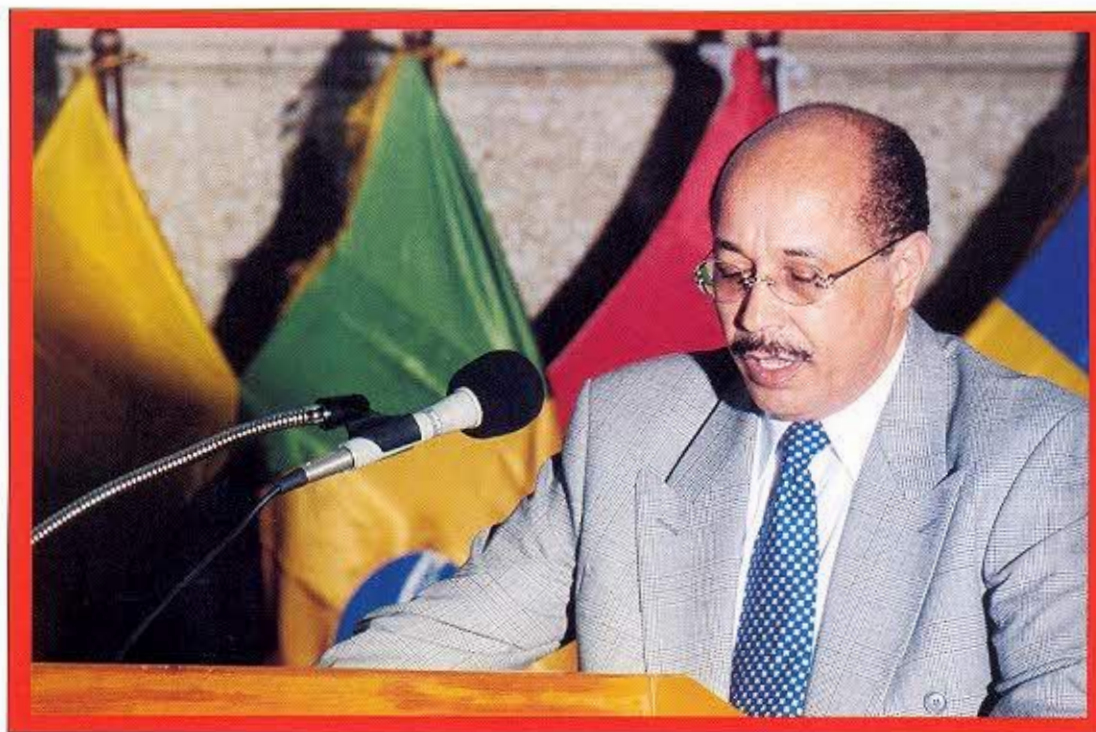
holder of 50% of the shares of the Dominican Oil Refinery (REFIDOMSA), which is operated by Shell.

Oil consumption for industrial use increased by 6.1% from 1996 to 1997. Likewise, the sale of various types of gasoline rose by 6.3% during the same period.

According to data published by REFIDOMSA, the consumption of oil-based fuels has increased steadily over the last few years: whereas in 1995 consumption amounted to 16,998,300 barrels, in 1997 this figure had grown to 17,810,500 barrels.

At present, the refinery uses about 90% of its refining capacity, which is equivalent to 49,400 barrels per day, which indicates that to maintain the growth indicators for the consumption of oil products, steps will have to be taken to enlarge this capacity and meet domestic demand.

The country's authorities are working on this. Their objective is to meet demand in terms of quantity and quality, as an element supporting the socio-economic development of the Dominican Republic. 



The Technical Secretary of the Office of the President of the Dominican Republic, Mr. Juan Temístocles Montás, has been promoting transformation of his country's electric power sector in order to improve the living conditions of the population and build up the competitiveness of Dominican production sectors.